

C.A. de Santiago

Santiago, catorce de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de los considerando Décimo, párrafo final del motivo Décimo Octavo y Vigésimo tercero, que se eliminan.

En el considerando Décimo Tercero se suprime la frase “Que, habiéndose acogido la excepción de cosa juzgada respecto del demandante don Segundo Omar Cartes Suazo”.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

1º) Que en primera instancia, se resolvió, respecto del demandante principal: “I.- Que se ACOGE la excepción de cosa juzgada respecto del demandante don Segundo Omar Cartes Suazo,..”; y contra la aludida sentencia el demandante dedujo recurso de apelación para que esta Corte enmiende conforme a derecho la sentencia recurrida determinando, en definitiva, rechazar todas las excepciones planteadas por el Consejo de Defensa del Estado, esto es, las de cosa juzgada, pago y prescripción extintiva de la acción civil, acogiéndose, por tanto, la demanda civil reparatoria de los perjuicios causados a don Segundo Omar Cartes Suazo.

2º) Que en cuanto a aplicación de la excepción de cosa juzgada respecto de la demanda planteada por don Segundo Omar Cartes Suazo, ha de considerarse que en materia de prescripción de las acciones civiles derivadas de violaciones a los derechos humanos, existe asentada jurisprudencia de la Corte Suprema y de esta misma Corte, en cuanto que la obligación internacional del Estado de Chile de reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, impide que la regulación de derecho interno del instituto de la prescripción



pueda invocarse como obstáculo para la obtención de dicha reparación.

3º) Que en ese mismo sentido también se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de la cuestión de la excepción de cosa juzgada, entre otras, en la sentencia de casación de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, rol N°72.024-2020, en que se establece lo siguiente:

“29º) ...al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al derecho internacional de los derechos humanos;

30º) Que todo lo que se lleva reflexionado evidencia el error de derecho en que incurre la sentencia en examen, pues hace primar lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre la normativa internacional examinada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que demandan los familiares de las víctimas y cuya existencia no ha sido controvertida...

31º) Que, en síntesis, no se desconoce aquí la validez y legalidad de los fallos anteriores, incluso dictados por esta propia Corte que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe



ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior;”. (En el mismo sentido, Corte Suprema rol 36.319-2019).

4°) Que así las cosas, estos sentenciadores estiman que, así como se ha establecido respecto de la excepción de prescripción de las acciones civiles derivadas de violaciones a los derechos humanos, de igual forma, la obligación internacional del Estado de Chile de reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad impide que la regulación de derecho interno del instituto de la cosa juzgada pueda invocarse como obstáculo para la obtención de dicha reparación, caso en que la legítima pretensión de seguridad y certeza jurídica a que obedecen sus efectos, cede ante la exigencia de justicia en todo tiempo que importa la reparación integral en los crímenes de lesa humanidad, razones por la cual se rechazará la correspondiente excepción de cosa juzgada deducida por el Fisco, como se dirá en lo resolutivo.

5°) Por su parte y en atención de las razones asentadas en los considerandos Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la sentencia a quo, plenamente aplicables a la víctima principal, se rechazarán igualmente a su respecto las demás excepciones de reparación satisfactiva o integral y de prescripción, deducidas por la demandada respecto del actor Segundo Omar Cartes Suazo.

6°) Que en lo que concierne a los perjuicios denunciados por el demandante Segundo Omar Cartes Suazo y al momento de establecer el quantum indemnizatorio, además de lo razonado



por el *a quo* en los considerandos Séptimo, Décimo Cuarto y Vigésimo Primero de la sentencia, esta Corte tendrá en consideración que resulta un antecedente fáctico acreditado en el juicio, que el demandante fue víctima de torturas por agentes del Estado según ha sido reconocido por la Comisión Valech, consistentes en tormentos con electricidad en diferentes partes del cuerpo y golpes, con ocasión de su detención el 30 de octubre de 1973, tanto en Policía de Investigaciones y posteriormente, en el Regimiento de Chillan; como asimismo, fue víctima también de prisión política en la Cárcel de Chillán desde el 3 de noviembre de 1973 al 22 de mayo de 1974, totalizando casi siete meses de privación de libertad, hechos que atendida su gravedad y precisión, permiten tener por acreditada la grave afectación de la dignidad personal y el sufrimiento del actor, producto del daño físico y emocional provocado por las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de que fue víctima, y de la prolongada privación de libertad que fue objeto.

7°) Atendido lo anteriormente razonado, esta Corte estima proporcional a la gravedad de dicha afectación la regulación prudencial de la indemnización por daño moral reparatoria del daño causado por agentes del Estado, para don Segundo Omar Cartes Suazo, en la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

8°) Que el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, establece que “La apelación deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.” Al respecto, la doctrina señala que “el sentido natural y obvio de fundamentar no es otro que apoyar con motivos y



razones eficaces una cosa, efectuar una crítica concreta y razonada”, (*Mosquera Mario y Maturana, Cristian. Los recursos procesales. Ed. Juridifica de Chile, 2010, 2da. Ed., página 149*), como asimismo, que “La necesidad de fundamentar un recurso de apelación no se trata de un problema de extensión o brevedad o laconismo, sino que de un problema de precisión, de determinación, de claridad. En suma, la fundamentación del recurso debe ser un estudio de la sentencia, hecho en forma exhaustiva y crítica, indicándose los agravios que causa al apelante y cómo se los obviaría con una resolución diferente.”. (*Marcos Libedinsky, Estudios de la reforma procesal. Ley N°18.705 del 24, 5.1988. Citado por Mosquera y Maturana, op. cit. página 150*).

9º) Que analizado el arbitrio en estudio, en cuanto las demandantes Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y Claudia Ivana Cartes Espinoza, éste carece absolutamente de fundamentos en los términos exigidos por la norma procesal citada, limitándose a realizar las pretensiones concretas que se formulan en el petitorio, razón por la cual el recurso deducido a su respecto no puede prosperar.

Por los fundamentos precedentes y lo previsto en el artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política de la República; la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; los artículos 186, 189, inciso primero y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara, que:

i) **se revoca** la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro dictada por el 20º Juzgado Civil de Santiago, dictada en los autos Rol C 10.462-2022, caratulados Cartes con Fisco de Chile”, sólo en cuanto acogió la excepción de cosa juzgada respecto del demandante don Segundo Omar Cartes



Suazo y **en su lugar**, se decide que se rechazan las excepciones de cosa juzgada, reparación integral y prescripción deducidas por la demandada; y **se acoge la demanda civil deducida por el mencionado actor y se condena** al Fisco de Chile a pagar al mismo, la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precio al Consumidor desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo; e intereses, desde que el demandado incurra en mora.

ii) **Se confirma** en lo demás apelado el fallo en alzada.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.

Regístrese y devuélvase.

N°Civil-11094-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XTVZXTFMEBY

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z., Ministro Suplente Manuel Esteban Rodríguez V. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, catorce de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a catorce de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XTVZXTFMEBY